

Arias Salgado, durante el Pleno del Congreso que debate la moción de censura socialista

«El acuerdo PSOE-PCE acelera la unidad de la izquierda»

Durante cinco horas se prolongó el debate previo a la votación de la moción de censura propuesta en el Congreso de los Diputados por el Grupo parlamentario Socialista. Cinco horas que, al oteo de la votación que ha de producirse con toda seguridad durante la noche de mañana, fueron testigos privilegiados de una discusión agresiva y dura, en la que los reproches, acusaciones e insultos hubieron de oírse desde las dos partes de la Cámara. Alfonso Guerra, Rafael Arias Salgado, Abril Martorell, Santiago Carrillo y Adolfo Suárez fueron el prólogo a un discurso de Felipe González largo y tedioso (él mismo calificaría de «pesado»), en el que el secretario general del PSOE pasó revista a los temas fundamentales de la actualidad nacional, desde el orden público hasta la política exterior.

Pero, tal vez, y contrariamente a lo que pudiera pensarse en un primer momento, el punto más interesante de la tarde estuviera en la pugna dialéctica mantenida, a raíz de una afirmación de Rafael Arias Salgado poniendo en duda la legitimidad democrática del Partido Comunista, entre Santiago Carrillo y Adolfo Suárez. El líder comunista descubrió un intento de negociación, en octubre de 1978, por parte del Gobierno, con el PCE, al objeto de formar una mayoría de Gobierno. La verosimilitud de estas afirmaciones dio lugar a una viva polémica en la que llegó a implicarse a los norteamericanos. Otro tema destacable en importancia fue el tratado sobre Televisión Española, sobre algunos de cuyos mandos el socialista Alfonso Guerra dijo tener abundante documentación de los fraudes cometidos, «incluso por algún miembro del banco azul». El debate, que fue cortado a las nueve treinta de la noche de ayer, tendrá su continuación a partir de las tres de la tarde de hoy, y se espera se prolongue hasta altas horas de la madrugada.

Duras acusaciones de Alfonso Guerra

«Suárez no soporta más democracia y la democracia no soporta más a Suárez», afirmó Alfonso Guerra.

Guerra comenzó afirmando que Suárez era un líder carismático que en su anterior intervención ante el Congreso «se cayó de la vitrina y se hizo pedazos». Le acusó de considerar la democracia como un mal a soportar y que los socialistas no habían buscado apoyos en UCD, por lo que «si ésta se rompe será gracias a los esfuerzos de Adolfo Suárez»; añadió que la mitad de la UCD está con Fraga y la otra mitad con Felipe González.

El número dos del PSOE reprochó también a Suárez haber hecho gala de desprecio de la democracia y de fracasar en todos sus objetivos. Afirmó que en el pasado Pleno el PSOE esperaba escuchar de Suárez una explicación, cuando en realidad tan sólo recibió una pura teoría de literatura política. Luego señaló las carencias del Gobierno: muestra de desprecio a las instituciones democráticas, violencia de la extrema derecha, delincuencia callejera, ausencia de cambios en los puestos de la cúspide policiaca porque «aquellos que ocuparon puestos de responsabilidad los siguen ocupando».

Calificó de tibias las condenas de la llamada «Operación Galaxia» y la absolución de un miembro, que no mencionó, de la familia del Generalísimo Franco, y citó el caso de la corrupción en televisión, a los defectos e irregularidades del Consejo de Deportes, criticando

la gestión en el sector público, la de la Seguridad Social y la carencia del Gobierno con respecto a los problemas del medio ambiente. También denunció un bandazo en el planteamiento autonómico del Gobierno. Para terminar, afirmó que el hecho de que Suárez se olvidase de las relaciones internacionales durante su discurso «lo dice todo».

Arias Salgado: «Existe la unidad de la izquierda»

En nombre del Gobierno le respondió el ministro Arias Salgado, que comenzó diciendo: «La única realidad es que la moción de censura es un acto político de primera magnitud que se inserta siempre en una estrategia de lucha por el poder entre ideologías y partidos. No hay, pues, en esta operación de censura, gesto moral que valga, ni conducta testimonial que valga, ni actitud desinteresada que valga».

Añadió que no es serio acusar al Gobierno de incumplimiento de su programa a tan sólo trece meses de su toma de posesión, ni afirmar que el Gobierno ha incumplido sus acuerdos con otras fuerzas políticas cuando UCD ha hecho gala constantemente de su capacidad de compromiso, ni es serio —prosiguió— afirmar que el Gobierno ha hecho gala de desprecio de las reglas de juego democráticas, cuando la ejecutiva del PSOE ha vulnerado regularmente el Reglamento de la Cámara que recoge esas reglas.

El ministro afirmó que «violación del Reglamento de la Cámara si constituye desprecio de las reglas de la democracia parlamentaria porque el respeto al Parlamento es la primera regla de esa democracia». Como no es serio asegurar que el Gobierno ha producido grave deterioro en el prestigio de las instituciones parlamentarias por acordar con el PSOE ciertas enmiendas a la Ley de Autonomía Universitaria. No es serio afirmar, como hace la moción, que al Gobierno le falta voluntad para enfrentarse con lo que se califica de corrupción en TVE, cuando «el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo de ordenación administrativa y financiera hasta conseguir un superávit. Y quiero avanzar desde aquí —puntualizó Arias Salgado— que el Gobierno no permitirá ninguna clase de sustituciones en base a una supuesta corrupción porque en una democracia todo el mundo es inocente hasta que por los tribunales de Justicia y no por la directiva del PSOE se sentencie su culpabilidad».

Luego, Arias Salgado subrayó que «esta Cámara no ignora la opinión pública española debe saber que en todas las democra-

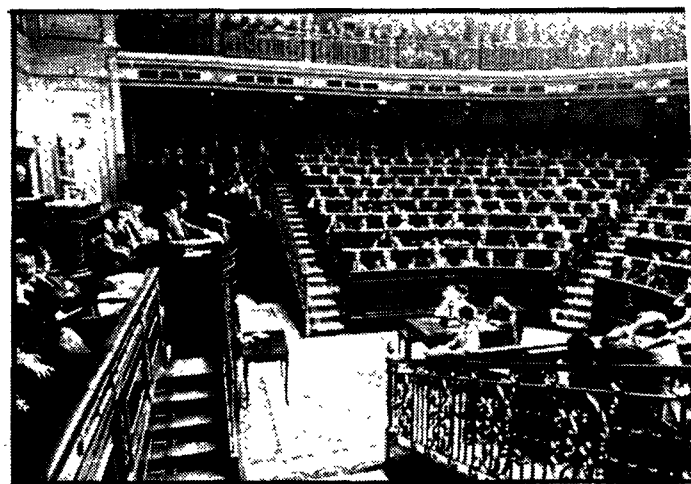
●● Carrillo: «Suárez estuvo dispuesto a gobernar con el PCE»

●● Suárez: «Rechazamos colaborar en el Parlamento con los comunistas»

●● González: «Los tribunales de Justicia, bajo la vigilancia de la soberanía popular»

cias europeas la presencia o no del PCE en el Gobierno o el acuerdo entre socialistas y comunistas en un frente de unidad

palabra, para replicar a la intervención del señor Arias Salgado, el portavoz del Grupo Socialista, Alfonso Guerra, quien dijo que el ministro de la Presidencia estaba en baja, «y por eso ha aceptado venir aquí, a ver si se recupera». Calificó el papel del ministro como de «peón de brega», y dijo que estaba bien capacitado para desempeñarlo «a juzgar por la capacidad de cinismo que demuestra». Pasó luego a preguntarse quién representaba a quién en la Cámara, señalando que él no hablaba, como había dicho Arias Salgado, en nombre de ciento treinta y un diputados, sino sólo en el de los que habían firmado la moción de censura. Afirmó que no había un solo diputado en la Cámara que no hiciera, fuera de la ideología que fuera, una censura dura a Suárez. Después de subrayar que era antidemocrático calificar al grupo comunista antes de que éste emitiera su voto, exigió que terminara la corrupción y el robo en TVE y en el deporte español, citando, en este sentido, un documento —que dijo tener en su poder— de escritura de compra de un miembro del Gobierno en el que se defraudaba al



para que acudieran a la Cámara. Sobre la cuestión municipal expresó que muchos de los candidatos a alcalde en pueblos españoles eran los mismos presidentes de Fuerza Nueva en la localidad correspondiente, y señaló que los socialistas se habían opuesto a la concesión de determinadas licencias para evitar la especulación del suelo, y que la de los ayuntamientos había sido la única inversión pública que había aumentado en el año 79. En materia de orden público, terminó mostrándose en contra del uso de la informática «para controlar los abrigos de visión de un senador de UCD», y destacando que, según un titular de Prensa, la UCD vasca no descartaba una amnistía, al tiempo que culpaba al Gobierno del hecho de que en Andalucía estuvieran apareciendo algunos aparatos explosivos.

Arias Salgado reclamó el uso de la palabra a continuación

cación de Euzkadi.» Terminó refiriéndose al Estatuto de Autonomía de Galicia, del que dijo que «tuvimos allí una indisciplina de voto, pero luego nuestros parlamentarios terminaron aceptando la disciplina y votando lo que se les había pedido y en lo que se había logrado gracias a su propio trabajo».

Querella criminal

Nuevamente, Alfonso Guerra subió a la tribuna de oradores para, en turno de réplica, decir que la querella criminal contra TVE ya había sido presentada, y que el vicepresidente segundo del Gobierno, Fernando Abril, había dicho que o retiraban la querella o no se llegaría a un acuerdo sobre el Estatuto de RTVE. Señaló que el plan urbanístico estaba paralizado en muchos lugares porque para aprobarlo se necesitaba una

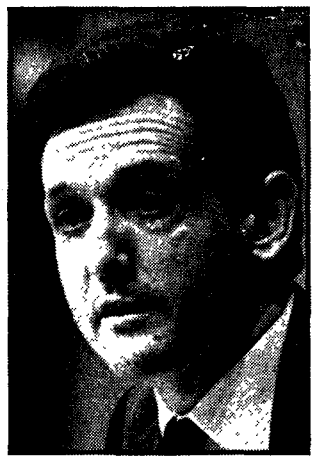
Dos frases para la Academia:

Guerra:

■ «Suárez no soporta más democracia y la democracia no soporta más a Suárez»

Arias Salgado:

■ «Se acelera la unidad de la izquierda con riesgo de dividir al país en dos frentes irreconciliables»



de izquierdas constituye una cuestión política de primera magnitud por las repercusiones internas e internacionales que tienen. Y en España —continuó— no cabe infravalorar esta cuestión afirmando que dada la composición de esta Cámara, es inevitable o resulta obvio el apoyo comunista a la moción de la directiva socialista. No puede, en efecto, infravalorarse, no ya por los problemas entre socialistas y comunistas, el acuerdo en esta Cámara contribuye a acelerar la dinámica de unidad de la izquierda con el riesgo de dividir el país en dos frentes irreconciliables».

Para terminar, Arias aseguró que la moción, caso de prosperar, «conduce necesariamente a la formación de una coalición, parlamentaria o gubernamental entre socialistas y comunistas que se añade al pacto municipal», recordando que el propio González admitió que la posibilidad de gobernar pasa por el país, de una forma u otra, con el PCE. «Y esto debe saberlo la opinión pública porque es realmente serio, como lo es en cualquier democracia occidental».

Polémica sobre corrupción

A continuación hizo uso de la

fisco en miles de millones de pesetas. Ironizó sobre el hecho de que el ministro calificara de anécdotas los miles de millones que él había mentado, y dijo que el señor Arias Salgado era el menos indicado para hablar sobre estos temas, ya que era hermano del director general de RTVE. Señaló que era mentir y utilizar un estilo sucio decir que los socialistas quieren el control de RTVE, ya que éste es un organismo dependiente del Gobierno, «y, por tanto, jamás nosotros propondremos un solo nombre para su cargo de director general». Pasó a continuación a considerar el hecho de que Suárez había conseguido en la fecha de su investidura ciento ochenta y cuatro votos favorables, «y a ver cuántos consigue ahora. No hablo —añadió— de cuántos diputados se le puedan ir, que eso ya sucederá en su día». Apuntó el hecho de que UCD fuera «una mayoría contra natura, como se puede comprobar si se vuelve la vista hasta 1977», y dijo que en el partido gubernamental se unían los miembros del franquismo. Se refirió al Estatuto de Autonomía para Galicia, y dijo que el pacto realizado sobre él había sido criticado por la propia UCD gallega, y afirmó que los ministros habían tenido que ser presionados por el PCE

para responder a las acusaciones del líder socialista, cosa que le fue concedida por el presidente de la Cámara, el ucedista Landelino Lavilla. El ministro de la Presidencia comenzó lamentando que Alfonso Guerra «haya acudido a argumentos personales, cuestión esta que demuestra su propia incapacidad. Yo no he descalificado al Partido Comunista —añadió—, pero sí digo que su presencia en el Gobierno plantea problemas de primera magnitud, como es evidente al contemplar el panorama europeo». Señaló que «al señor Guerra le encanta hablar de corrupción. Pero la corrupción hay que probarla, y si no callarse. Para eso están los Tribunales, y hay que esperar a que éstos se pronuncien antes de hablar. No se puede amparar uno eternamente en la inmunidad parlamentaria para insultar». Después de apuntar que «en este país el franquismo ya no existe», y que «esta Cámara es democrática y este Gobierno también», se refirió al planeamiento urbanístico, que dijo «está siendo retrasado por la negligencia de los ayuntamientos socialistas». «El señor Guerra —añadió— ha tenido la osadía de llamarme mentiroso. UCD del País Vasco ha dicho que podría considerarse una am-

mayoría de dos tercios en los ayuntamientos, y UCD se negaba a votarlo. En cuanto a la petición del ministro, en el sentido de que el señor Guerra le citara un solo caso de abuso legislativo, éste le dijo que «las personas detenidas siguen si gozar en muchas zonas del derecho de asistencia de letrado, reconocido en la Constitución». «Y en cuanto al hecho de romper el secreto parlamentario, añadió, he de decir que en la sesión en que se concedieron los suplicatorios a Herri Batasuna fue el propio portavoz de UCD quien rompió el secreto.» Una breve respuesta de Arias Salgado, en el sentido de afirmar que el portavoz socialista no había dicho nada nuevo y que en ese momento se podía dar por concluido el debate, una petición de palabra por parte de Alfonso Guerra, que no fue concedida, dieron paso a la tribuna de oradores al líder del partido comunista, Santiago Carrillo.

Revelaciones de Carrillo

Carrillo dijo que el PC consideraba en la Cámara los mismos derechos y del



el Gobierno no había mostrado tantos reparos hacia el PCE cuando tuvo la necesidad de discutir los Pactos de la Moncloa. «En otoño del 78 —subrayó Santiago Carrillo— el Gobierno de UCD solicitó al PCE para hacer un acuerdo de mayoría. Esto nos fue propuesto en una cena celebrada en Castellana, 3, y en la que participamos los señores Abril, Calvo, Pérez Llorca, Solé Turá, Eugenio Triana y yo mismo. La cosa me pareció tan extraordinaria que incluso le dije a Fernando Abril que se lo pensara bien. Pero él me llamó a los dos días para decirme que ya lo había pensado y que me lo volvía a proponer. Extrañado, me fui a ver a Suárez, que me dijo que lo habían pensado así porque, y son sus palabras exactas, el PCE era un partido nacional y democrático. Recuerdo que yo le contesté al presidente que aceptaba comenzar esas negociaciones porque no descartaba el que con el correr del tiempo algún partido pusiera en duda nuestra legitimidad, y porque propondríamos un programa que bien podría ser un programa electoral, y porque estábamos dispuestos a que a ese acuerdo se asociara el PSOE. El señor Suárez estuvo dispuesto a gobernar con el PCE.»

Le contestó el vicepresidente segundo del Gobierno, Fernando Abril, quien señaló que «el señor Carrillo confunde los deseos con la realidad. En aquel tiempo era imposible un acuerdo porque CC.OO. lo quería, al igual que UGT, a tres bandas y con participación de los partidos políticos, para darle al PCE una base de la que carecía. En cuanto comenzamos a hablar de la OTAN quedaron canceladas las negociaciones». Después de una breve matización de Adolfo Suárez, volvió a hacer uso de la palabra Santiago Carrillo, quien dijo que el vicepresidente había dicho algo de verdad, «que buscaba un acuerdo con nosotros que sacase al Gobierno de sus dificultades en materia política, económica y social. Probablemente, lo que quería era complicarnos, con su habitual astucia, en la política del Gobierno. Fui a ver a Suárez y él habló de un acuerdo de mayoría de Gobierno. Cuando le pregunté sobre lo que pensarían los americanos me dijo algo que hoy no repito para no hacerle daño».

Suárez le contestó que «en toda aquella etapa de construcción del Estado y de elaboración de la Constitución se necesitó la colaboración de todos los partidos. Pero nuestras diferencias ideológicas con respecto al PCE son evidentes, y mostramos nuestro rechazo más absoluto a la colaboración parlamentaria con él». Afirmación esta que fue esmentada por el señor Carrillo, cuando dijo, a continuación, que el presidente del Gobierno había hecho acuerdos con el PCE, y no ga de este agua no beberé, porque tal vez necesite de nuevo esta ayuda para defender a la



Felipe González presentó el programa socialista



Tras un descanso de 10 minutos subió a la tribuna de oradores el secretario general del PSOE, Felipe González, con el fin de presentar el programa que su partido prevé en el caso de resultar aprobada la moción de censura.

Empezó señalando el líder socialista las líneas generales de lo que, según él, «debe ser un programa de gobierno». Y en este sentido se refirió a la necesidad

de que el mismo sea debatido por las fuerzas políticas del Congreso, «lo que se nos hurtó —añadió— con motivo del voto de investidura». Además es preciso que el programa constituya un cauce para la formación de un camino que cuando menos exprese la línea a seguir por la sociedad y, por último, que lleve a la conciencia de los más que los problemas han de resolverse en los momentos cruciales.

Acto seguido, Felipe González pasó a enumerar los grandes problemas de España, como el paro y la desigualdad, entre otros, para concluir en la existencia de una desconfianza en el pueblo español acerca del actual sistema político: «No hay construcción autonómica, ni se puede resolver la crisis, ni se garantizan las libertades, ni hay una posición determinada del país en el concierto internacional.»

Pasó a referirse a la Administración del Estado y aludió a los manidos problemas heredados: «Hay que construir un Estado nuevo —dijo— con un esquema opuesto al anterior.» Señaló la urgencia de un control del horario de los funcionarios, frenar la expansión de plantillas, encarar el paso de la Administración central a la autonómica, reducir el número de cuerpos, eliminar cotos cerrados y, en definitiva, agilizar, en general, el sistema administrativo burocrático español. «El principio básico para



todo esto consiste en que la Administración esté al servicio del pueblo», y los esfuerzos, según Felipe González, han de concretarse en la exigencia de trabajo y rendimiento a la Administración, recuperar la moral perdida, así como la eficacia, potenciación y el neutralismo administrativo.

Las autonomías

Tras este análisis general, el discurso del dirigente socialista se centró en el capítulo autonómico que ha de estar basado «en el respeto a la idea de que el Estado de autonomías emana de la Constitución de 1978, el respeto también a la voluntad popular, la consecución de un mapa autonómico indiscriminado y generalizado y permitir el funcionamiento de los estatutos respectivos».

De esta forma, el programa de acción inmediata que propugna

el PSOE se centra en el logro de una serie de medidas que liberen el proceso autonómico actual y, dentro de esta línea, Felipe González subrayó una serie de casos concretos como el relativo al estatuto gallego, del que dijo que «hay que garantizar su equivalencia con los ya aprobados»; el referente a Andalucía, «al que hay que ofrecer una resolución distinta a la que ya ha rechazado el pueblo andaluz», y, a fin de cuentas, se sustrajo al conjunto de las comunidades autonómicas, urgiendo en el compromiso de desbloquear todos estos procesos, aplicando también medidas políticas que eviten nuevos conflictos o estancamientos. A su vez concretó su intervención en la cuestión de Navarra y manifestó que es imprescindible un mapa autonómico que comprenda comunidades y regímenes especiales, por lo que Navarra debe instrumentarse como una de

(Pasa a la pág. siguiente)

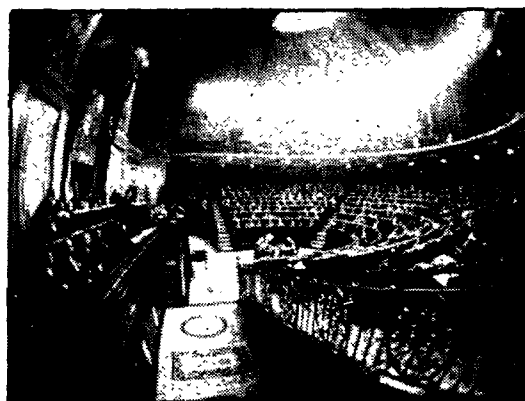
Crónica de España

¿Subsistirá España?

¿Subsistirá España? Relata Laureano López Rodó que la pregunta se la hizo un profesor de la Universidad de Upsala, después de su conferencia sobre las autonomías. Esta misma pregunta me la hago yo, y supongo que la mayoría de los españoles, tras escuchar el debate parlamentario sobre la moción de censura presentada por el PSOE. ¿Podrá sobrevivir España a esta indeseable, indigente, trapacera e insolvente clase política? Descompuesta, desconcertada, desalentada, corroída, desmoralizada, España está en sus manos, incapaz, al parecer, de reaccionar frente a la agresión mortal del despotismo partitocrático.

Esta nueva jornada de debate parlamentario sólo ha servido para confirmar ominosas presunciones anteriores. Los apañes circunstanciales han prevalecido durante todo el tiempo del cambio revanchista sobre cualquier consideración estimable de la política, entendida como servicio a España y al bien común. Los trapos sucios del consenso se transformaron nuevamente en arma arrojadiza de unas pobres pandillas caciquiles en lucha por el poder. Unos por permanecer en su disfrute y otros por asaltarlo. La conclusión es obvia: los principios se subordinan a los intereses. Todos estuvieron y están dispuestos a colisiones, alianzas, contubernios y puñaladas, con independencia de teóricas disparidades ideológicas. La bastardía de esta forma impúdica de democracia ha comparecido durante el debate con sus más indeseables perfiles.

La crisis del parlamentarismo convencional alcanza dimensiones universales. Es cierto. Pero su degradación acusa proporciones aberrantes en España. Si alguna duda cabía, los dirigentes del consenso nos han convencido de que el cambio político no estuvo presidido en ningún momento por un aliento democrático mínimamente honorable. Preocupaba sólo cumplir los mandatos sinárgicos de destruir el Régimen de Franco, hasta sus raíces, pues llevaba consigo el aniquilamiento de España. A determinados planteamientos de poder mundial resultaba indeseable que el pueblo español hubiese dado al mundo la sorpresa de un despliegue formidable de energía, capaz de catapultar España al noveno puesto en la escala del



desarrollo económico, y diera pruebas de poder continuar su escalada de bienestar y soberanía, superando a otras naciones desarrolladas y formalmente democráticas. Además de ello, los términos en que el milagro fue logrado por el pueblo español podrían transformarse en modelo de esfuerzo, de unidad y de soberanía conjunta para los pueblos de la comunidad hispanoamericana. Había que destruir esa posibilidad. Era necesario a los poderes mundiales liberal-socialistas aniquilar esa opción y hundir al pueblo español en la miseria, la indigencia, la debilidad y la servidumbre de los años treinta. UCD, PSOE y PCE, con colaboraciones adyacentes, han cumplido su misión. España está económicamente arruinada, socialmente rota, moralmente corrompida, políticamente inane y territorialmente dispersada. Ese es el balance único que cabe extraer del debate parlamentario.

Más allá de los enfrentamientos ocasionales y de la exhibición de los trapos sucios, aparece lo bastante expresivo que la moción de censura no pasa de constituir la mostrenca cobertura de una maniobra política de descuyuntamiento, cuyos centros de promoción y de decisión están fuera del Parlamento, de la ideología a que formalmente se acogen los partidos y, por supuesto, del interés nacional y de la voluntad popular, cuya teórica representación parlamentaria apenas si excede del 50 por ciento del censo electoral.

La pugna verbal entre Carrillo y Suárez, sobre todo, ha permitido confirmar que esta ficción democrática no administra valores nacionales ni objetivos populares, sino planes extraños al destino de España e incluso a su posible supervivencia como Nación. La falsa moción de censura presen-

tada por el PSOE no expresa la ruptura del consenso entre UCD y el socialcomunismo, merced al cual ha sido posible una brutal revancha internacional encaminada a la descomposición de España, buscada con denuedo desde hace varios siglos. El debate permite comprobar que es otro el consenso alternado. Me refiero al consenso de fuerzas mundiales. A Suárez no le importaban demasiado los norteamericanos cuando chalaneaba con Carrillo. Se sentía seguro bajo el paraguas rothschildiano de Giscard, proclive entonces y ahora al entendimiento neutralista con la URSS. Suárez teme hoy al cambio coyuntural de la política mundial. Busca desesperadamente acomodarse al actual juego de las tensiones. Pero fuera del Gobierno y el Parlamento subsiste la filiación al giscardismo, coincidente con la estrategia de la Internacional Socialista. Felipe González da la batalla a Suárez como servidor de una determinada acción internacionalista de neutralización de Europa. No es que Suárez defina una severa y congruente opción contraria. Sucede tan sólo que Suárez y sus dóciles desfranzadores han cumplido ya su misión. Por eso se les acusa de franquistas. El traidor no es menester, una vez la traición cumplida, reza el adagio. Ha llegado la hora de dar el decisivo paso adelante. Es el momento de instalar un poder de inequívoco corte liberal-socialista. Eso es todo. ¿Pero quién patrocina la operación? ¿Dónde está el motor de este nuevo cambio? Es la única cuestión que importa dilucidar.

Suárez es consciente del alcance de la nueva conspiración antinacional, la cual le convierte en víctima, en vez de protagonista, como hasta ahora. De ahí que su casi exclusiva preocupación al presentarse al debate parlamentario fuese la oferta del *Estado de las autonomías*. Pretendió adelantarse al asalto socialcomunista con una oferta autonómica y federalista. Buscó restar los argumentos de peso a la agresión socialista. Las autonomías y el terrorismo que las sostiene son la clave de la disputa. Muy lerdos habríamos de ser para no entenderlo y dejarnos apresar en los argumentos económicos.

No se debate el ser o no ser de España. Se enfrentan dos maneras de destruir. La cuestión planteada por el profesor sueco a Laureano López Rodó es la única válida. Y no cabe duda que tanto da el triunfo de Suárez o el de Felipe González. Ambos llevan España a la descomposición y el pueblo español a la servidumbre.

Ismael MEDINA

Debate sobre la moción de censura al Gobierno

(Viene de la pág. anterior)

ellas, salvo que quiera integrarse en Euzkadi. En cuanto a las comunidades autónomas provinciales se refirió al caso concreto de Madrid, declarando que el PSOE potenciará su autonomía, pero sin interferir en el estatuto de Castilla y León.

A renglón seguido, el secretario general del PSOE estableció a exigencia de su programa autonómico en concretar un calendario electoral que impida la permanente situación de comicios. En este aspecto se ciñó a una serie de actuaciones políticas que el PSOE llevará a cabo le aprobarse la moción de censura, tales como simultanear a partir de 1983 las elecciones a las comunidades autónomas con las de las corporaciones municipales, realizar un calendario de autonomías antes de 1982 y mantener un calendario de transferencias que sea un modelo institucional generalizado para todas las comunidades en igualdad. «El PSOE —concretó— defenderá las comisiones mixtas y la política de participación de las comunidades autónomas en labores administrativas ordinarias y constituirá un Consejo Fiscal de Política Financiera para conseguir una España solidaria.»

En definitiva, dijo Felipe González que su modelo autonómico se concreta en un Estado general constituido por un proceso de síntesis y no de segregación que facilite la unidad de España.

En un último apartado de este tema de autonomías se refirió a las corporaciones locales, «a las que es preciso fortalecer». Tras citar la desproporción autonómica existente en las corporaciones locales españolas en relación de las que rigen en los países de la CEE, Felipe González mantuvo que «hay que dar una homogeneidad superior a España y que su Gobierno aportará una política activa y urgente de apoyo a la más íntegra autonomía municipal».

Diagnóstico pesimista

Haciendo un análisis de la situación económica actual, Felipe González manifestó que «existe un crecimiento nulo, el paro aumenta, la industria es vieja y no ofrece posibilidades de competitividad; la inversión es decreciente; hemos llegado a una elevada tasa de inflación y continúan existiendo desigualdades tanto entre las personas como entre los territorios». «Por lo tanto —siguió diciendo Felipe González— hay que fijarse unos objetivos prioritarios. Para superar la crisis tiene que darse un esfuerzo de comprensión y solidaridad. La economía debe estar al servicio de los hombres y no al revés.» «Hay que destacar —siguió diciendo— dos objetivos básicos: aumentar el empleo, luchar contra el paro y redistribuir la riqueza nacional. La gran interrogante está en cómo conseguir esos objetivos a la vez que se lucha contra la crisis.»

«Volviendo al primer punto, aumento del empleo, deben conjugarse todos los instrumentos necesarios. Se requiere un enorme esfuerzo de solidaridad. Está claro que la sociedad española está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario. La economía debe dirigirse en estos momentos hacia la inversión y la exportación. La clave está en aumentar la productividad.»

Como elemento fundamental para solventar la crisis económica actual, el orador señaló la necesidad de un incremento masivo

de la productividad para frenar los índices inflacionistas. «La productividad sólo afecta al mundo del trabajo y la empresa, sólo con ella se logra la tasa de crecimiento necesario que permita un mayor empleo.»

El procedimiento de aumento de la productividad que se impone en todos los países democráticos, explicaría el señor González, debe basarse en la concertación de programas entre el Estado y las empresas. Para estas relaciones es necesario, según el PSOE, un Estatuto de la Empresa Pública, así como un sistema práctico de relaciones industriales, la regulación efectiva de la huelga y la devolución del patrimonio sindical.

«La superación de la crisis —según añadía el dirigente socialista— debe basarse en un acuerdo interfederal de todas las fuerzas nacionales (SIC), que permita, ante todo, un incremento de los salarios conforme el aumento del costo de la vida.»

Posteriormente, González se refirió al paro, señalando la imposibilidad de mantener el incremento de los mil nuevos parados diarios. «Hay, contra esto, que llevar la lucha para eliminar el pluriempleo y la realización desmesurada de horas extra.» «También en la misma línea es necesario una rejuvenecimiento de la población agrícola», añadía.

Todo ello se debe lograr, según los socialistas, con un plan cuatrienal de inversión pública y en sectores privados de especial interés. Es necesario para que ello sea eficaz una ampliación de la colectivización de los servicios públicos.

Más adelante, el señor González insistió en la necesidad del desarrollo de la investigación científica y tecnológica en los campos productivos, y en el lapso de una igualdad real de los ciudadanos en el campo económico, para lo cual deben ser reducidos los gastos públicos e incrementadas las inversiones de forma que se reparta riqueza.

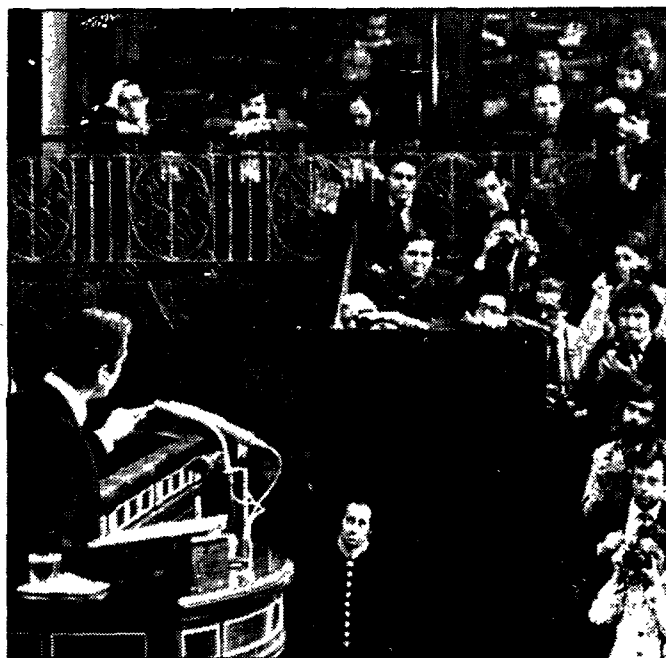
Otros puntos contemplados por el líder socialista fueron la reforma total de la Administración para la mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos; la posibilidad real en materia de educación para todos los niños españoles, aun cuando sean de medios agrarios, mediante la ampliación al máximo de la educación básica y un cambio del sistema de fomento de viviendas, de forma que se alcancen las 300.000 anuales.

Propuso el líder socialista un plan anual económico que acompañe a los presupuestos generales del Estado en que se atiendan todos los aspectos del gasto público y las inversiones, y que esté sometido a un control parlamentario.

Refiriéndose al aspecto fiscal Felipe González señaló la necesidad de transferir recursos a los entes autonómicos y descentralizar los impuestos. Anunció que los socialistas no pensaban crear nuevas leyes fiscales, aunque sí actualizar los tipos y reducciones vigentes desde 1977 en el impuesto sobre la renta.

Refiriéndose al programa energético que según el señor González «frena y condiciona la evolución económica», señaló la importancia de adoptar medidas como otros países para lograr la menor dependencia posible del petróleo.

Es difícil, según los socialistas, reducir el gasto doméstico, pero sí el consumo en materia de transportes, siendo necesaria una modificación de los modos de vida, y especialmente un incremento de la utilización de transportes colectivos.



Respecto a la política económica en torno a la energía señaló la necesidad de estudiar los precios, eliminando las subvenciones y mantener precios reales como incentivos al ahorro. Señaló la necesidad de disminuir la dependencia del petróleo, alterando otras fuentes, especialmente gas y carbón, y utilizando sólo la energía nuclear como sustituto de último recurso.

Respecto al tema nuclear, insistió en la necesidad de crear un Consejo de Seguridad Nuclear, ajeno totalmente al Gobierno.

Igualmente, defendió el incremento masivo de la participación de la empresa pública en el sector eléctrico, promoviendo nacionalizaciones y la creación de un grupo reducido de grandes empresas estatales.

Las dos últimas partes de la intervención de Felipe González estuvieron dedicadas al desarrollo del binomio situación internacional y seguridad-libertad. Apurado por el tiempo, que no cesó de recordarle la presidencia, Felipe González recordó que el mundo está hoy soportando una situación de tensión creciente entre Este y Oeste. Señaló el hecho de que está próxima la celebración en Madrid de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea.

«Los ciudadanos de este país —dijo el líder socialista—, en el noventa por ciento de los casos, no conocen este hecho. La política internacional debe entenderse analizada en un doble plano. Las relaciones Norte Sur expresan más bien un deseo de cooperación. Las relaciones Este-Oeste representan una relación hegemónica. Las tensiones entre las grandes potencias impiden el desarrollo normal y rápido de nuestro país. Y España es un país de tipo medio, en todos los sentidos, un país occidental e indiscutiblemente adscrito a la órbita occidental, y ha de estar, por tanto, al servicio de los grandes objetivos de la paz internacional. Hay que renegociar la situación bilateral. Son cada vez más los líderes de la CEE que piensan que España puede jugar un importante papel de no integrada en las líneas en presencia.» Apuntó la necesidad de fortalecer la política de integración en la CEE, de desarrollar sistemáticamente nuestro potencial de relaciones con América Latina y con el mundo árabe, de contribuir a la pacificación del Sahara, de preparar activamente la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, con la suficiente información pública al respecto.

A continuación, Felipe González centró su discurso en los temas de seguridad y libertad.



«Frente a los timoratos de la libertad —dijo—, el proyecto de gobierno socialista encierra un afán firme: la libertad como seguridad, la promoción de las condiciones de igualdad. Esa libertad y esa seguridad que hoy los ciudadanos de España echan en fal El acierto del tratamiento de este problema está ligado a la salvaguardia del sistema democrático. La tensión o el equilibrio entre libertad y seguridad no se resuelve entre nosotros por la simple ley de los vasos comunicantes. Por el contrario, pensamos que a menor libertad, menor seguridad. Un poder arbitrario nunca es neutral. Hay que defender las seguridades de la libertad.» Señaló que el proyecto socialista valoraba «la alta y destacada misión de las fuerzas de seguridad y de orden público», y señaló la necesidad de reformar y actualizar sus planes de estudio, dotarlas de medios materiales, «y no sólo de medidas legislativas». «Este tratamiento de las fuerzas de seguridad —añadió— no puede amparar supuestos de irregularidad y conductas de ilegalidad.» Después de subrayar como necesaria «la suspensión de los derechos individuales de determinadas personas», destacó que «el terrorismo implica un proceso frontal de los cauces democráticos, y no puede ser contemplado con indiferencia e ingenuidad. Hay problemas

que laten en la raíz del terrorismo. Sin perjuicio de darle la respuesta penal que se merece, es necesario analizar las raíces políticas, económicas y sociales del mismo». Propuso el acceso de los ciudadanos a la participación a través del compromiso de garantizar las libertades, matizando que consideran derogadas todas las normas que se opongan a la Constitución, la presentación de un proyecto de ley de tutela de las libertades, de otro que delimite el uso de la informática, de un proyecto de ley orgánica de defensor del pueblo, de otro que regule el derecho de asilo, y de una ley de divorcio, que contemple las causas de mutuo acuerdo de los cónyuges. Terminó su discurso señalando que hay que hacer llegar los principios constitucionales a todos los ciudadanos, pidiendo para el Jefe del Estado la moderación y para el jefe del Gobierno la ejecución. Expresó la permanencia de los Tribunales de Justicia bajo la vigilancia de la soberanía popular y finalizó con estas palabras: «La votación que resulte debe representar a la opinión de la Cámara y de la sociedad, ésas son mis intenciones, y no ninguna otra que se me achaca desde las tribunas.» A las nueve treinta de la noche, el presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, levantó la sesión, que se reanuda a las tres de la tarde de hoy.

No asustó la alternativa

«La verdad es que, por mucho empeño que se ponga, los resultados nunca responden a las expectativas. Los papeles me quitan espontaneidad; he intentado evitar, como decía Fraga, que las cifras no me danzasen en la cabeza...» Felipe González, tras 4 magnetófonos, arrinconado frente a la salida principal del hemiciclo, tras hora y tres cuartos de intervención («Decían éstos del presidente...», rezongaba, a su vera, un ministro), se sujetaba con un leve temblor el alfiler de la corbata. Por encima de sus comentarios a toro pasado («Creo que hemos trazado un proyecto político global, porque el juicio popular va a incidir sobre un programa de conjunto, no sobre cada una de las dos mil cuestiones parciales enunciadas por el Gobierno UCD; no sé si mis palabras habrán fortalecido o no la unidad de la izquierda; lo malo de la política autonómica del centro es que después de la anunciada segunda lectura venga una tercera o una cuarta; lo que hay que acabar de una vez es con la creencia de que si este Gabinete cae, cae la democracia. Si fuera verdad ya habría acabado hace tiempo») pesaba la confianza de un Suárez, excusándose de declaraciones, pero que, a decir de uno de sus hombres, «está otra vez en forma», la reunión a puerta cerrada y las posteriores sonrisas del Gobierno censurado, tras las palabras del líder socialista.

Pérez Llorca estaba muy tranquilo porque «ya no haya alternativa» y Marcelino Oreja a causa de que, efectivamente, el partido de la oposición después de fustigarle por lo propio, hubiera dedicado, «y muy confusamente», tres minutos a las relaciones exteriores. «Enorme decepción, su opción autonómica no es ni cara ni barata, no existe», recalaba el ministro competente mientras Muñoz Peirats y Soledad Becerril se citaban para cenar en «Rugantino» con varios colegas de escaso, imaginó que para celebrar lo celebrable. Iñigo Cavero le pedía a su colega de banco azul, Juan Antonio Ortega, que le enseñara a los socialistas la distinción entre un juicio militar, un contencioso-administrativo y un recurso al Supremo, «porque, los pobres, no se aclaran». Fraga, comedido ante el voto de hoy, dijo sólo que se aburría —y no hacía falta que lo rubricase, pues la televisión lo testificó a las claras en dos o tres tomas— y Rojas Marcos —¡lo que faltaba!— apuntillaba

al otro ariete del PSOE, Alfonso Guerra: «En su particular debate con Arias Salgado, ha salido perdiendo. A este hombre deberían someterle a un juicio de ética parlamentaria, no se pueden tolerar tantos insultos...»

El mismo Felipe había reconocido en el estrado que su discurso era largo y pesado. No podía confesar, porque tal vez no lo sabía, que las minorías, su victoria moral en forma de abstención, habían quedado decepcionadas de su intervención. Sagaseta le llamó «burgués», que era lo último que podía esperar en su estreno formal como censor de ejecutivos, y Roca lo calificó de confuso. Los vascos, presuntamente presionados por los socialistas, no comparecieron, aunque tal vez lo hagan hoy. Carrillo, por supuesto, obviaba los defectos y estaba de acuerdo con lo expuesto. Pero su objetivo, al revelar las ofertas de Suárez sobre la formación de una mayoría de Gobierno con los comunistas (y se guarda los detalles de la conversación para sus memorias, según confirmó el diputado Curiel a la salida), en la sesión estaba cumplido.

Rafael Arias destacó la oportunidad —«perfectamente estudiada»— que el partido, mejor dicho, su presidente, le había brindado. Felipe González, una impresión generalizada entre CD, catalanes y varios «mixtos» que prestigiaban el gesto socialista, defraudó y ni siquiera consiguió inquietar a los empresarios, representados oficiosamente por José Miguel de la Rica, presidente del INI. Los comunistas, ya digo, esperando el efecto boomerang de las revelaciones de su secretario general. Ya se lo advirtieron a López Raimundo: «Os creéis que habéis debilitado a Suárez, que entra al trazo como si nada, pero ya me contaréis cuando vuestras bases más radicalizadas se hayan enterado de que estuvisteis a punto de pactar con él...»

Y todos, absolutamente todos los grupos indefinidos a la hora del voto, sin querer revelar su decisión última (Blas Piñar lo más que adelantó fue su enfado por la interpretación supuesta que había dado del mismo el señor Arias Salgado). Por ayer, bastaba con la decepción socialista.

Javier CARRASCO